

INCIDENCIA DE LAS NORMAS SOBRE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN LA CONTABILIDAD DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO.

Isabel Bretón Azofra
Jefa de Servicio de Contabilidad
Comunidad Autónoma de La Rioja

INTRODUCCIÓN

En primer lugar, antes de exponer la experiencia de nuestra Comunidad Autónoma frente a los nuevos compromisos con la estabilidad presupuestaria quisiera comenzar haciendo una breve reseña de cual ha sido la evolución que ha ido configurando el actual sistema contable de nuestro sector público.

Los avances de nuestro sistema se han ido apoyando en los cambios más recientes de la normativa estatal sobre contabilidad pública, como el Plan Contable estatal de 1994, los documentos sobre los principios contables públicos, la nueva clasificación de entidades según su régimen contable, la modificación del título sobre contabilidad pública en la Ley General Presupuestaria, que sistematizó las normas contables y supuso avances tan importantes como la elevación de rango de los principios contables públicos o la reforma relativa a la formación de la Cuenta General, que ha mejorado el procedimiento de rendición y el contenido de ésta.

La Comunidad Autónoma de La Rioja inició el proceso de modernización en contabilidad pública implantando la contabilidad patrimonial por partida doble en 1993, con un plan contable propio inspirado en el Plan General de Contabilidad Pública del Estado de 1981. Fue una adaptación modesta que seguía basándose fundamentalmente en la contabilidad presupuestaria, realizada mediante una aplicación informática de conversión de aplicaciones presupuestarias a cuentas contables y algunos ajustes manuales. La información de contabilidad patrimonial proporcionada era escasa y

prácticamente se reducía a un balance de situación y unas cuentas de resultados anuales producidas tras el cierre de cuentas.

No obstante sirvió para clarificar y centralizar la información sobre determinadas operaciones cuyo detalle únicamente se registraba en aplicaciones auxiliares y permanecía en el centro que las gestionaba, como por ejemplo los préstamos concedidos por la Administración o las operaciones de crédito.

Asimismo puso de manifiesto de forma evidente algunas carencias, como la ausencia de inventario general de bienes, que gracias a ello se han ido subsanando con el tiempo.

La aplicación del nuevo Plan General de Contabilidad Pública del Estado de 1994 (como Plan Marco) y de los documentos sobre los principios contables públicos exigía la simplificación de los procedimientos contables y el diseño de un nuevo sistema de información contable que integrara los subsistemas financiero, presupuestario y de gestión.

El nuevo sistema contable se implantó en la Comunidad Autónoma de La Rioja en 1999. Se elaboró un nuevo Plan General de Contabilidad Pública para la Administración General de la C.A.R. aprobado mediante Orden de la Consejería de Hacienda de diciembre de 1998 e inspirado en el Plan Marco Estatal de 1994.

Con este nuevo sistema se produjo una importante simplificación de los procedimientos y una indiscutible mejora de la calidad, oportunidad y relevancia de la información a suministrar. Está basado en la gestión descentralizada, evita las duplicidades en la entrada de datos y contribuye a la realización del control interno.

Desde entonces ha venido funcionando de forma satisfactoria y a él se han ido incorporando nuevas funcionalidades sobre la versión inicial:

- Módulo de Anticipos de Caja Fija
- Módulo de Proyectos de Gasto y Gastos con Financiación Afectada.
- Módulo de Gestión y Recaudación de recursos de otros entes.

Ha soportado la incorporación de nuevas operaciones relacionadas con las competencias asumidas por la CAR en materia de Educación y Sanidad y cumple perfectamente con las exigencias legales respecto a la rendición de cuentas del Plan contable y con las necesidades de información de los usuarios internos y externos.

Las necesidades de los usuarios internos de la información contable en la Comunidad Autónoma, quizás debido a la influencia del ámbito jurídico del entorno público, se dirigen básicamente hacia un objetivo de control, eminentemente desde un punto de vista presupuestario y con principal propósito hacia la rendición de cuentas.

Respecto a los usuarios externos son principalmente órganos de control, como el tribunal de cuentas. El resto, bien por falta de formación o de concienciación no plantean exigencias sobre demanda de otro tipo de información.

La Contabilidad Nacional interesa principalmente a los usuarios que se ven en mayor medida afectados por las magnitudes macroeconómicas y que pueden tener poder de decisión sobre ellas como Organizaciones Internacionales y Gobiernos, para poder comparar datos en orden a la concesión de ayudas y formulación de políticas económicas, o a grandes empresas con capacidad de intervenir en la determinación de políticas.

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SEC 95

La preocupación actual de las Comunidades Autónomas por la Contabilidad Nacional se fundamenta en las exigencias de la nueva normativa presupuestaria.

La creación de la Unión Europea y Monetaria (UEM) trajo consigo la necesidad de coordinar las políticas presupuestarias de los países miembros para poder conciliarlas con la política monetaria común.

El Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) aprobado por el Consejo de Ámsterdam de 1997 exige a los estados miembros conseguir a medio plazo el objetivo

de equilibrio o superávit presupuestario de forma que en ningún caso el déficit pueda superar el límite del 3% del Producto Interior Bruto (PIB) nacional.

Para garantizar la consecución de este objetivo se aprueban en nuestro país, a finales del año 2001, las leyes de estabilidad presupuestaria, que pretenden disciplinar la actuación presupuestaria del Sector Público, tanto estatal como autonómico y local. En este contexto el Gobierno decide que el déficit cero debe ser el objetivo de la política presupuestaria de todas las Administraciones Públicas, entre ellas las Comunidades Autónomas.

Estas normas definen el concepto de estabilidad presupuestaria como la situación de equilibrio o superávit computado en términos de capacidad de financiación, de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 95).

El SEC 95 es un sistema de Contabilidad Nacional, comparable a escala internacional, que constituye el marco contable vigente en la Unión Europea, de utilización obligatoria para todos los Estados Miembros. No es un sistema directamente aplicable al presupuesto de las Administraciones Públicas ni a la Contabilidad Patrimonial, pero deberemos aplicarlo para poder determinar la capacidad de financiación de acuerdo con sus criterios para calcularla.

Es decir, el cómputo del déficit debe hacerse en términos de contabilidad nacional. Éste es un extremo de capital importancia en la reforma aprobada ya que supone la normalización de la contabilidad nacional como instrumento de medida del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.

Por tanto, podemos decir que las Normas de Estabilidad Presupuestaria demandan de la contabilidad pública una información económica que no se obtiene directamente de los distintos planes y normas contables públicos.

En contabilidad pública existen conceptos próximos, como el resultado presupuestario (diferencia entre ingresos y gastos presupuestarios, excluidos los pasivos financieros) que muestra en que medida los recursos presupuestarios han sido

suficientes para financiar los gastos presupuestarios, pero en la estimación de su saldo entra el capítulo de activos financieros, que no son computables para el cálculo del déficit. Podría haberse requerido un nuevo estado contable referente al déficit no financiero o capacidad/necesidad de financiación.

Pero el problema es más profundo puesto que se producen una serie de desviaciones metodológicas respecto al SEC 95, es decir desviaciones metodológicas de la contabilidad nacional respecto a la contabilidad pública:

- Existe disparidad de criterios respecto a las entidades que integran el sector de Administraciones Públicas entre Contabilidad Pública y Contabilidad Nacional.
- Existe disparidad de criterios respecto a la imputación de operaciones contables entre Contabilidad Pública y Contabilidad Nacional.

El objetivo de estabilidad presupuestaria debe cumplirse tanto en las fases de elaboración como de aprobación y liquidación del presupuesto. Esto tiene como consecuencia inmediata un trabajo complementario adicional que es el de convertir la contabilidad pública y el presupuesto en un presupuesto en términos de contabilidad nacional para poder asegurar si se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria.

Ello no supone dejar de elaborar los estados e informes requeridos en contabilidad pública. Es una tarea adicional y en ocasiones complicada. Para su desarrollo es necesario un profundo conocimiento del SEC95 y de los ajustes en la contabilidad presupuestaria.

Como ayuda metodológica, además de la interpretación directa de las normas establecidas en el SEC 95, existe un Manual para su aplicación en relación con el déficit y la deuda pública publicado por Eurostat, oficina estadística de la Comunidad Europea dependiente de la Comisión, que consiste en una serie de normas adicionales de interpretación y aclaración de los principales criterios que afectan a las operaciones realizadas en el Sector Administraciones Públicas. Se actualiza periódicamente con decisiones de Eurostat sobre operaciones y problemas puntuales y concretos.

En la Administración General del Estado el paso de la contabilidad pública a la contabilidad nacional se realiza por un departamento especializado, concretamente la Subdirección General de Análisis y Cuentas Económicas del Sector Público, dependiente de la Intervención General, que conoce en profundidad la materia y no tiene dificultades de índole práctica para realizar el proceso. En nuestro caso se echa de menos el conocimiento de unos mecanismos claros para realizar la conversión con garantías que permita asegurar la calidad de los datos de la Contabilidad Nacional en un entorno cada vez más descentralizado en cuanto a la política de gastos.

DESVIACIONES METODOLÓGICAS DEL SEC 95 RESPECTO DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA

ÁMBITO SUBJETIVO DE APLICACIÓN. DELIMITACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO

En contabilidad pública encontramos en la Ley General Presupuestaria un punto de referencia para una clasificación contable de las entidades del sector público, donde se señala como han de consolidar la información esas entidades, distinguiendo entre:

- Sector público administrativo. Las entidades que integran dicho sector aplican los principios contables públicos y las normas de contabilidad establecidas en el Plan General de Contabilidad Pública (aprobado mediante Orden Ministerial de 6 de mayo de 1994) y sus normas de desarrollo.

- Sector público empresarial. Las entidades que deben aplicar los principios de contabilidad recogidos en el Plan General de Contabilidad de la empresa española (aprobado mediante Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre) así como en sus adaptaciones y disposiciones que lo desarrollan.

- Sector público fundacional. Las entidades del sector público que deben aplicar los principios de contabilidad recogidos en la adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos (aprobado mediante Real Decreto 776/1998, de 30 de abril) y sus normas de desarrollo.

Sin embargo, la Ley General de Estabilidad Presupuestaria establece una diferencia clara entre los entes en que participa cada Administración Pública, en dos bloques:

- Los entes que se incluyen en el artículo 2.1, que abarca la Administración General más los entes públicos que no se financian mayoritariamente con ingresos comerciales. Éstos son los que se encuadrarán en el Sector Administraciones Públicas en Contabilidad Nacional.

- Los entes que se incluyen en el artículo 2.2 que engloba a los que se financian mayoritariamente con ingresos comerciales. Estos son los que se encuadrarán en el Sector de Sociedades no Financieras en Contabilidad Nacional.

Esta separación trae consigo importantes consecuencias, ya que son distintos tanto el concepto de marco de estabilidad aplicable como las medidas tendentes a la corrección de las situaciones de desequilibrio que se pudieran producir. Por tanto una correcta delimitación es básica pues de ella depende dónde encuadraremos a nuestros entes institucionales, con independencia de su configuración jurídica y del régimen de contabilidad pública o privada que les sea de aplicación de acuerdo a la normativa vigente.

Para el grupo del art. 2.1 se exige que, en su conjunto, cumpla en términos de contabilidad nacional, es decir de SEC 95 el objetivo de estabilidad presupuestaria fijado.

Así el objetivo de estabilidad presupuestaria que se fije a la Comunidad Autónoma será el sumatorio de los resultados, en términos de contabilidad nacional, de la capacidad o necesidad de financiación de todos los entes incluidos en el bloque primero, es decir en el Sector Administraciones Públicas.

Para las entidades incluidas en el artículo 2.2, básicamente sociedades mercantiles, que obtienen una mayoría de ingresos de naturaleza comercial, el cumplimiento del principio de estabilidad se traduce, en una posición de equilibrio financiero que impida que incurran en pérdidas, es decir, saldos negativos en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Según el manual del SEC 95 únicamente las entidades institucionales públicas no orientadas al mercado deben encuadrarse dentro del Sector Administraciones Públicas y en consecuencia su equilibrio presupuestario debe ser computado a efectos de las Normas de Estabilidad Presupuestaria. Así para ubicar a una entidad en uno u otro sector se han de analizar las siguientes reglas:

1.- Analizar si es unidad institucional. Para ello ha de verificarse si dispone de autonomía de decisión y de un completo sistema de cuentas.

2.- Analizar si es pública o privada. Para ello se ha de comprobar si está controlada por la Comunidad Autónoma, bien porque tiene participación mayoritaria o bien el control efectivo de los órganos de gobierno. En el caso de participaciones paritarias el criterio a aplicar es el de quien realice la mayor parte de su financiación.

3.- Analizar si se encuadra en el Sector Administraciones Públicas o en el Sector de Sociedades no Financieras. Hay que comprobar si sus funciones son las de redistribución de renta y riqueza y si no lo son, examinar si sus ingresos por ventas no alcanzan el 50% de sus costes de producción, debiendo computar para ello el resultado de varios ejercicios económicos.

En estos últimos años se ha venido produciendo en todas las Administraciones y también en las Comunidades Autónomas una progresiva descentralización de los servicios prestados por la Administración General a través de organismos públicos o privados, en aras de dotar de mayor flexibilidad a la gestión. Ello ha provocado la segmentación de la información en unidades contables independientes y por tanto la información presupuestaria, contable y financiera específica de la entidad principal ha perdido relevancia.

La consolidación de cuentas es pues un reto imprescindible para abordar. Los plazos señalados en la normativa para la rendición de cuentas de las entidades retardan mucho los procedimientos de agregación contable, a lo que hay que añadir la presentación de sus cuentas en formatos tradicionales que dificultan el tratamiento rápido de la misma.

Hubiera sido inevitable en cualquier caso definir con claridad un catálogo de todas aquellas entidades sobre las que la entidad principal ejerce algún tipo de control. A ello hay que añadir la necesidad de regular las obligaciones de suministro de información intermedia de todas las entidades dependientes en cuanto a oportunidad y difusión. Las Normas sobre Estabilidad Presupuestaria han obligado a realizarlo con premura.

Ha sido necesario proceder a una revisión de todas las entidades en las que participa la Comunidad Autónoma en cuanto a porcentajes de participación, composición de órganos de gobierno, normativa reglamentaria de aplicación, fuentes de financiación utilizadas, destino real del gasto. Ha sido necesario también analizar balances y cuentas de resultados en empresas y entidades empresariales para verificar si sus ventas cubren el 50% de sus costes de producción.

Así en el caso de esta Comunidad Autónoma se ha encuadrado dentro del Sector Administraciones Públicas:

- Administración General
- Organismos Autónomos Administrativos
- Universidad
- Consorcios
- Fundaciones
- Entidades Públicas Empresariales
- Sociedades Mercantiles que no cumplen la regla del 50%.

Teniendo presentes los problemas para la clasificación de las distintas entidades, la normativa (Orden 2283/2003 del Ministerio de Hacienda en la que se publican los

Acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 10 de abril de 2003) obliga al mantenimiento de un “Inventario” actualizado y detallado de los organismos dependientes de las Comunidades Autónomas, a fin de que se pueda determinar los que son objeto de aplicación de la Normativa de Estabilidad (y por tanto computan a efectos del cálculo del déficit). Este inventario, salvo variaciones justificadas tendrá una vigencia de cinco años y podrá ser recurrido a Eurostat.

La comunicación del listado de entes que consolidan en 2005 para nuestra Comunidad Autónoma se ha producido el 26 de diciembre de ese mismo año, con efectos desde 1 de enero anterior, es decir, afectando totalmente al objetivo de estabilidad en curso. Debido a ello la posibilidad de la realización de correcciones que subsanaran las potenciales desviaciones no ha sido efectiva.

DESVIACIONES METODOLÓGICAS DEL SEC 95 RESPECTO DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA

TRATAMIENTO DE DETERMINADAS OPERACIONES CONTABLES

Los criterios del SEC 95 no son directamente aplicables a la contabilidad presupuestaria o financiera. Algunos son incluso contradictorios con la normativa presupuestaria y contable. Se manejan o emplean únicamente para realizar el cálculo de la capacidad o necesidad de financiación en términos de estabilidad presupuestaria y no se reflejan efectivamente en la contabilidad.

Los ajustes se realizan a partir de la capacidad/necesidad de financiación calculada desde la contabilidad presupuestaria, es decir, la diferencia entre derechos y obligaciones reconocidas de los capítulos I a VII (no financieros)

Los más importantes por ser los que más nos han afectado cuantitativamente en el cálculo del déficit son los siguientes:

A.- TRATAMIENTO DE LAS APORTACIONES A EMPRESAS PÚBLICAS

Los gastos por aportaciones de capital se imputan presupuestariamente al capítulo VIII como activos financieros. La norma general en contabilidad nacional es considerarlos transferencias, es decir operaciones no financieras, salvo que cumplan una de estas condiciones:

- Haber recibido un activo a cambio
- Esperar recibir dividendos.

Si no las cumplen, los gastos por aportaciones de capital se reclasifican como operaciones no financieras, concretamente como transferencias corrientes o de capital, incrementando el déficit.

B.- TRATAMIENTO DE LOS IMPUESTOS

En la Contabilidad Nacional la valoración de los recursos no financieros debe incluir un ajuste por recaudación incierta de impuestos.

El Reglamento 2516/2000, de 7 de noviembre, que en España se aplica desde 2003, determina cómo realizar el ajuste, bien corrigiendo los derechos reconocidos con criterio de devengo mediante la minoración de la recaudación incierta estimada con procedimientos que deben estar aprobados por Eurostat; o bien calcularlos de acuerdo al principio de caja.

De este modo es como se han venido calculando en nuestra Comunidad. El ajuste se realiza, por tanto, restando los derechos reconocidos de los capítulos I, II y III del presupuesto, que abarcan todos los tributos, e incluyendo en su lugar la recaudación neta total del período tanto de presupuesto corriente como de ejercicios anteriores.

C.- TRATAMIENTO DE LOS CONTRATOS DE ABONO TOTAL DEL PRECIO AL FINAL DE LA OBRA.

Durante la ejecución de la inversión no se registran movimientos en la contabilidad presupuestaria y sí en la contabilidad nacional como Formación Bruta del Capital Fijo. Al finalizar la obra, o se produce un pago único o, si se refinancia, se realizan pagos parciales durante varios ejercicios. En el momento del pago es cuando se registra como inversión en contabilidad presupuestaria y debe deducirse en Contabilidad Nacional.

OTROS AJUSTES AL CÁLCULO DEL DÉFICIT

TRANSFERENCIAS DE FONDOS EUROPEOS

A partir del ejercicio 2005, con la Resolución 22/2005 de Eurostat el criterio de imputación de las transferencias de la Unión Europea se basa en registrar los derechos reconocidos en el momento en que la Comunidad Autónoma envía las certificaciones de gasto a Europa.

Esta Resolución ha clarificado mucho la imputación de estas transferencias ya que anteriormente regía el criterio general de imputación de derechos, es decir se debían reconocer cuando Bruselas contabilizaba las obligaciones reconocidas, hecho difícil de conocer para nosotros, por lo que los ajustes de estas transferencias eran un misterio hasta la determinación del cálculo del déficit por la IGAE en el ejercicio siguiente.

TRANSFERENCIAS DEL ESTADO, INEM Y SEGURIDAD SOCIAL.

TRANSFERENCIAS INTERNAS

Reflejan el ajuste necesario para que, partiendo del dato de la Comunidad Autónoma se llegue al dato proporcionado por cada uno de esos agentes, con el fin de garantizar la jerarquía de las fuentes. El criterio para la Administración coincide con los principios contables públicos, es decir se consideran derechos reconocidos por transferencias la cifra que consta como obligaciones reconocidas en la contabilidad del ente concedente.

INFORMACIÓN A SUMINISTRAR. ACUERDOS DE 10/04/2003 DEL CONSEJO DE POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA.

La Comunidad Autónoma debe estimar por tanto todos estos ajustes a partir de su contabilidad presupuestaria para poder controlar el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria antes de la aprobación del presupuesto y a lo largo del ejercicio económico, pero la competencia para el cálculo del déficit y quien debe consolidar el de todo el sector público es del Ministerio de Hacienda.

El pacto de Estabilidad y Crecimiento fija los límites del déficit para el conjunto del Estado. De acuerdo con las Normas de estabilidad presupuestaria corresponde al Ministerio de Hacienda, a través de la IGAE, determinar el cálculo de la capacidad o necesidad de financiación, o déficit o superávit de todas las Administraciones Públicas que entran dentro del ámbito subjetivo del Sector Público en Contabilidad Nacional.

La elaboración de la contabilidad nacional es responsabilidad de tres Instituciones:

1. Instituto Nacional de Estadística: Elaboración de las cuentas no financieras de economía española, excepto del sector Administraciones Públicas.
2. Banco de España: Elaboración de las cuentas financieras de la economía española.
3. Intervención General de la Administración del Estado: Elaboración de las cuentas no financieras del sector Administraciones Públicas.

Los Estados Miembros están obligados a utilizar fuentes estadísticas directas para la elaboración de la Contabilidad Nacional de las Administraciones Públicas. Estas fuentes son en el caso de las Comunidades Autónomas las contempladas en los Acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 10 de abril de 2003 (publicados por Orden del Ministerio de Hacienda de 31 de julio de 2003), que éstas suministran por conducto de la Secretaría del Consejo de Política Fiscal y Financiera (órgano coordinador entre el Ministerio y las Comunidades Autónomas). Esta información que suministran las CCAA es el pilar sobre el que se fundamenta la fiabilidad de la contabilidad nacional.

Se establecen tres categorías de información que deben remitir las Comunidades Autónomas:

1.- Información periódica trimestral.

Deben elaborarse los cuestionarios de información contable normalizada elaborados por la IGAE con información referida a los trimestres naturales.

Para los entes que siguen el Plan General de Contabilidad Pública:

- Estados relativos a la ejecución de los presupuestos de ingresos y gastos en términos de derechos y obligaciones reconocidas y en términos de pagos y cobros.
- Estados de la situación del endeudamiento y gastos financieros a la fecha a que se refiere.

Para los entes que siguen el Plan General de Contabilidad de la empresa o de instituciones sin fines de lucro:

- Balances de situación, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y detalle de transferencias recibidas e inversiones realizadas.

2.- Información periódica anual.

Información relativa a los Presupuestos aprobados de todas las entidades incluidas en el sector Administraciones Públicas.

Liquidación del Presupuesto y Cuentas Generales de todas las entidades sometidas al Plan General de Contabilidad Pública y las cuentas anuales de las entidades no sometidas a la contabilidad pública.

3.- Información no periódica.

Formación y mantenimiento del Inventario de Entes dependientes de las Comunidades Autónomas. Es fundamental para llevar a cabo una correcta clasificación institucional de unidades en el subsector Comunidades Autónomas y sociedades públicas no financieras.

El resultado del cálculo anual se comunica a las Comunidades Autónomas antes del 20 de julio. Hay un plazo para aclaraciones y reuniones bilaterales IGAE-Comunidad Autónoma y siempre antes del 1 de septiembre, la IGAE elabora un informe para el Consejo de Política Fiscal y Financiera respecto al cumplimiento de las Comunidades Autónomas fijado en su momento.

Además de este cálculo anual del objetivo por parte de la IGAE, como ya se ha dicho, las Comunidades Autónomas necesitan disponer de información exacta de la evolución de su déficit a lo largo del ejercicio y del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria que se les haya fijado.

El seguimiento del objetivo de estabilidad en las distintas fases del presupuesto y los distintos sectores ha puesto de manifiesto la necesidad de avanzar en la mejora de la comunicación institucional entre las Administraciones, tanto entre la Administración central y las Comunidades Autónomas, como entre cada Comunidad Autónoma con sus propios entes institucionales. Por otra parte ha producido nuevas necesidades en los sistemas de información:

- Sistemas de remisión de datos.
- Sistemas que faciliten la agregación y consolidación de cuentas.
- Sistemas de tratamiento de la información desde la perspectiva del SEC 95.
- Comparabilidad entre la contabilidad presupuestaria, pública y nacional.

Estas serían a mi juicio algunas de las prioridades que deben plantearse las instituciones contables en esta materia.